

## INFORME DE ACTIVIDADES ASESORIA H. SENADOR FIDEL ESPINOZA, MAYO DE 2023

### I. Generalidades:

En el marco de la asesoría parlamentaria, por encargo del Honorable Senador Fidel Espinoza durante el periodo que comprende desde el 2 de mayo al 19 de mayo de 2023, he realizado las siguientes actividades e informes:

1. Asistencia de manera presencial en las sedes del Congreso Nacional de Valparaíso y Santiago, a las Comisiones de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura; de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía y; de Vivienda y Urbanismo.
2. Reuniones de coordinación y balance legislativa con el Senador, los días martes y miércoles de cada semana legislativa.
3. Elaboración de propuesta de discursos en Sala para el Senador Espinoza.
4. Seguimiento del proceso constituyente en materias de sustentabilidad y medio ambiente.

### II. Discursos, Minutas e Informes.

#### 1. Minuta Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía 10-05-23

En la ocasión se recibió a la Directora Nacional de Obras Hidráulicas, señora María Loreto Mery, quien expuso respecto de los ejes programáticos del Ministerio de Obras Públicas, en relación al plan de inversiones destinadas a Ampliar cobertura para la población rural, conservación sistemas existentes, atender sequía, atender nuevo desafío de Saneamiento Rural, implementar nueva ley de Servicios Sanitarios Rurales. Después de la presentación los participantes realizaron preguntas y comentarios.

Participaron en esta sesión los Honorables Senadores: Sergio Gahona (presidente) Isabel Allende, Juan Castro y Carmen Gloria Aravena.

En la oportunidad no hubo acuerdos.

#### 2. Informe en derecho ley de cuidados Proyecto de ley «Yo Cuido y Yo Estudio». (Boletín N°15221-34)

**Resumen Ejecutivo:** Si bien el derecho a la educación y la igualdad ante la ley están consagrados y resguardados constitucionalmente en el artículo 19 N° 10 y 19 N° 2, y en una serie de tratados internacionales ratificados por Chile, nuestro país no resguarda ni protege adecuadamente el embarazo ni la maternidad y paternidad,

ni la condición de cuidadoras/es de estudiantes de instituciones de educación superior. Estudios dan cuenta que el embarazo y la maternidad en mujeres estudiantes universitarias genera tensiones por la multiplicidad de tareas atribuidas a los roles de mujer, estudiante, hija y madre; y en este sentido los cambios en el proyecto de vida pueden traer como consecuencia la deserción escolar, inestabilidad en las relaciones de pareja, posibilidad de más embarazos, problemas familiares, falta de oportunidades, cambio del rol de estudiante y problemas en el cuerpo. Al respecto, no existen normas, criterios generales o políticas públicas que colaboren en incentivar la corresponsabilidad ni en establecer apoyos obligatorios por parte de las instituciones para lograr conciliar las actividades familiares con las actividades universitarias.

La falencia de regulación ha sido discutida por medio de diversas mociones parlamentarias que comparten el mismo espíritu.

**Marco Jurídico Internacional.** Ninguno de los pactos y tratados internacionales ratificados por Chile, ampara de manera expresa el derecho al cuidado, pero éste puede desprenderse de una serie de normativas y otros derechos, y por otro lado, existen referencias normativas expresas y vinculantes referentes al principio de corresponsabilidad y conciliación.

**Convención de Derechos del Niño:** establece que los Estados Partes “se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar...”(artículo 3°), asimismo haciendo referencia a la responsabilidad de los padres frente al cuidado de niños, niñas y adolescentes, señala que ambos “tienen deberes comunes en lo que respecta a la crianza y desarrollo” (artículo 18°).

**Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW):** agrega disposiciones relacionadas a la corresponsabilidad entre ambos padres, como el “reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos” (artículo 5°), y en lo referente a impedir discriminaciones en el empleo y medidas para la corresponsabilidad del cuidado establece: “...permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños...” (artículo 11°); y también el reconocimiento de prestaciones y licencias vinculadas a la maternidad (artículo 11°).

**Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares 156, de la OIT:** reconoce en su preámbulo que “para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia”, introduciendo la noción de “responsabilidades familiares” tanto de hijos a su cargo como de otros miembros de su familia directa que de manera evidente necesiten su cuidado o sostén, y obligando a “incluir entre los objetivos de su política nacional el de permitir a las personas con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo, que ejerzan su derecho a hacerlo, sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales” (artículo 3°).

**Declaración Universal de Derechos Humanos:** reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado, y hace una especial mención a: “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales” (artículo 25°). Las primeras regulaciones y normativas de protección a la maternidad incluían el cuidado de manera tenue, pero solo para mujeres trabajadoras asalariadas formales. En este sentido cobra fundamental relevancia el primer documento que incorpora explícitamente el enfoque de derechos respecto a los cuidados: **X Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe**, celebrada en Quito el año 2007. Este consenso regional permitió poner el cuidado como tema central, reconociendo el cuidado como un derecho: derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. En este sentido, los países de la región se comprometieron a: “formular y aplicar políticas de Estado que favorezcan la responsabilidad compartida equitativamente entre mujeres y hombres en el ámbito familiar, superando los estereotipos de género, reconociendo la importancia del cuidado y del trabajo doméstico para la reproducción económica y el bienestar de la sociedad como una de las formas de superar la división sexual del trabajo”. Asimismo, se acuerda “adoptar medidas en todas las esferas de la vida particular, en los ámbitos económico y social, incluidas reformas institucionales, para garantizar el reconocimiento y el aporte al bienestar de las familias y al desarrollo promover su inclusión en las cuentas nacionales”.

La importancia de este reconocimiento no es retórica, implica e impacta en que son obligaciones para el Estado, constituyéndose el cuidado como un derecho humano para todas las personas. El Estado debe proteger este derecho, a través de garantizar su ejercicio, lo que implica obligaciones de hacer, positivas, y obligaciones negativas. Esto se convierte en una fórmula muy potente en términos

de consenso, cambiando el paradigma dominante. Posteriormente destaca el **Consenso de Brasilia (2010)** durante la **XI Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe**, donde los Estados avanzaron en reconocer: “Que el acceso a la justicia es fundamental para garantizar el carácter indivisible e integral de los derechos humanos, incluido el derecho al cuidado. Señalando que el derecho al cuidado es universal y requiere medidas sólidas para lograr su efectiva materialización y la corresponsabilidad por parte de toda la sociedad, el Estado y el sector privado”. En este desarrollo ocuparon un papel importante también las **Conferencias de República Dominicana el 2013** y la de **Uruguay el 2016**, en las cuales se reafirmó que el cuidado es un derecho, y se ampliaron las bases para el diseño de sistemas de provisión de cuidado basado en derechos. Por último, la **Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas** con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ha dedicado un objetivo completo, el número 5 a la igualdad de género: “Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y a las niñas”. En la misma dirección, la Meta 5.4 establece: “Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país”. Todo este desarrollo ha logrado posicionar el reconocimiento del cuidado como derecho humano, con la importante consecuencia que ello tiene para el bienestar de las personas. Sin perjuicio de ello, este avance normativo aún está lejos de ser suficiente, dado que en la práctica no se ha logrado que los países garanticen realmente este derecho, sin avanzar en las legislaciones acordes a él.

**Marco Jurídico Nacional.** A nivel de legislación nacional, no hay un reconocimiento explícito y sistemático del cuidado como derecho, pero se desprende de manera tacita de las siguientes normas:

**Ley 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia.** Promoviendo programas de asistencia y apoyo integral y adecuado a los padres y/o madres y a las familias en el ejercicio de sus responsabilidades, derechos, deberes y roles respecto de los niños, niñas y adolescentes.

**Ley 20.820, que Crea el Ministerio de la Mujer y equidad de Género,** que establece como uno de sus objetivos; “Promover la igualdad de derechos y obligaciones entre los hombres y las mujeres en las relaciones familiares, así como el reconocimiento de la responsabilidad común en cuanto a la educación, el cuidado y el desarrollo integral de los hijos e hijas”

**Ley N° 20.680**, que modifica el artículo número 224 del código Civil, introduciendo el principio de corresponsabilidad, en virtud del cual ambos padres, vivan juntos o separados, participarán en forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación de sus hijos.

**Código del Trabajo**, en relación con la protección de la maternidad y paternidad, ha sido reforzado por una serie de regulaciones que establecen derechos irrenunciables como: permiso prenatal maternal, prenatal suplementario, postnatal maternal, postnatal paternal; fuero maternal; derecho a licencia a madres o padres adoptivos, permiso especial para los trabajadores de ambos sexos en caso de enfermedad grave o terminal de un hijo menor de un año; derecho a sala cuna para madres con hijos o hijas menores de dos años que trabajan en empresas que tienen 20 o más trabajadoras; derecho a sala cuna para los funcionarios públicos; seguro para el acompañamiento de niños y niñas que padecen enfermedades graves; permiso a trabajadoras y trabajadores para alimentar a sus hijos/as menores de dos años; entre otros.

**Ley General de Educación N° 20.370**, establece en su artículo número 11 “El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos”.

A raíz de la falta de políticas públicas una la legislación ambigua, respecto de establecer de manera clara el derecho al cuidado y la carencia de un rol activo por parte del Estado, las estudiantes han levantado demandas logrando avanzar en resguardar los derechos de padres y madres estudiantes. Creado protocolos y mecanismos internos en las instituciones de educación superior que permitan un resguardo y protección a estudiantes de la educación superior en situación de embarazo, maternidad, paternidad o que detentan el cuidado personal de un menor o de una persona dependiente.

3. **Informe en derecho sobre delito de usurpaciones Proyecto de ley que modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el período de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes (boletines refundidos 13.657-07 y 14.015-25).** Minuta para votación en Sala Proyecto de ley sobre delito de usurpaciones Proyecto de ley que modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el período

de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes (boletines refundidos 13.657-07 y 14.015-25).

**Antecedentes:** El proyecto de ley surge a partir de la necesidad de facilitar la detención y el desalojo de los terrenos ilegalmente ocupados a lo largo del país, y de aumentar las penas del delito, especialmente de la usurpación violenta (el Código Penal distingue entre usurpación violenta y no violenta y asigna a ambos una pena de multa distinta según su gravedad).

La postura del Ejecutivo, a lo largo de la discusión, ha consistido en:

- fortalecer los mecanismos para materializar las detenciones y desalojos por estos delitos, en aumentar la pena de la usurpación violenta, y en
- castigar con especial severidad a quienes efectúen loteos irregulares o “loteos brujos”, pero sin aumentar excesivamente la pena del delito de usurpación no violenta.

Las razones del Ejecutivo para no aumentar en exceso las penas de la usurpación no violenta son las siguientes:

- en muchos casos se estará criminalizando la pobreza o la indigencia (tomas, campamentos, personas en situación de calle, etc.);
- no soluciona el problema de fondo, que es el de la falta de herramientas de los dueños para desalojar a los ocupantes;
- muchas veces el aumento de penas de delitos constituye un desincentivo de condena para el juez, que preferirá absolver antes que condenar a pena privativa de libertad por un delito de menor gravedad;
- si bien es cierto que el Ministerio Público y algunos expertos sugirieron, durante la tramitación, subir las penas de estos delitos, ello fue porque solo los delitos que tienen asociada pena privativa de libertad dan lugar a la detención en flagrancia (art. 124 del Código Procesal Penal), cuestión que se soluciona con aquellas partes del proyecto que explicitan que procede la detención en flagrancia respecto de ambas clases de usurpación, siempre que la persona se encuentre en el terreno ocupado ilegalmente. En la votación en particular del proyecto en la Comisión de Seguridad Ciudadana se rechazaron varias de las indicaciones del Ejecutivo que apuntaban en la dirección señalada, y se aprobaron varios artículos e indicaciones que aumentan excesivamente las penas de la usurpación no violenta, permiten detenciones masivas en

campamentos antiguos e incentivan que los particulares dueños de los terrenos intenten recuperarlos por la fuerza, con alto riesgo de enfrentamientos con resultados lesivos. Todo lo anterior representa un peligro para la paz social, por lo que el Ejecutivo decidió reponer las indicaciones en Sala.

Principales críticas a las propuestas aprobadas en la Comisión de Seguridad.

Respecto del delito de usurpación violenta:

- Se homologan dos figuras penales distintas; a la fuerza en las cosas y a la violencia en las personas, imponiendo una pena excesiva, de presidio menor en su grado medio a máximo (541 días a 5 años), a quien transgreda la norma.
- Se redefine a la usurpación como una conducta “permanente o transitoria”. Con esta modificación, podrá considerarse ocupación violenta el que una persona salte un cerco de un sitio eriaz solo para pasar la noche, o el de un grupo de estudiantes que se toma un colegio durante algunas horas en un paro.

Respecto: delito de usurpación no violenta,

- Al establecer una pena privativa de libertad para usurpaciones no violentas de presidio menor en su grado mínimo a medio (61 días a 3 años), conlleva a criminalizar situaciones de pobreza.
- A consecuencia de las altas penas, se produce un desincentivo, del poder judicial, para aplicar condenas a delitos de menor gravedad.
- Los expertos que, durante la tramitación legislativa, propusieron aumentar la pena de este delito, lo hicieron para que procediera la detención en flagrancia, porque solo procede cuando hay delitos con pena privativa de libertad. Esto se solucionó perfectamente con los artículos aprobados en la Comisión que explicitan que en tanto el ocupante ilegal esté en el inmueble habrá flagrancia y procederá la detención, no siendo necesario ya subir la pena.
- Respecto modificación del Código Procesal Penal para explicitar que procede la detención por parte de las policías siempre que el imputado permanezca en el inmueble (flagrancia).

- Permite que no solo funcionarios policiales, sino cualquier persona pueda practicar detenciones ciudadanas respecto de quienes estimen que están cometiendo el delito de usurpación. Esto es peligroso porque permite que cualquier persona o grupo de personas concurra a detener a posibles ocupantes ilegales, pudiendo generarse enfrentamientos entre unos y otros.

Respecto del artículo transitorio que protege situación de campamentos antiguos.

- Limita la protección de los campamentos únicamente en los casos que hayan ocupado el lugar de forma no violenta ni con fuerza en las cosas. El funcionario policial no tiene como saber las características que tuvo la ocupación en sus orígenes, arriesgando que se produzcan detenciones ilegales o arbitrarias.
- Considerando que la mayoría de las usurpaciones, se origina a través del ingreso a un lugar por una vía no destinada al efecto, la protección de campamentos se hace prácticamente ineficaz con la redacción aprobada.

Sugerencias de rechazo de otros artículos en votación separada.

Legítima defensa privilegiada.

- Se crea una autorización legal de autotutela, colocando en riesgo la institucionalidad estatal y la paz social.
- El hecho de que no se haya incluido la usurpación no violenta en la presunción no restringe la aplicación de esta, primero porque, en muchos casos, las personas no tienen cómo saber las características de origen de una ocupación (esa tarea le corresponde con posterioridad al juez)

Marco penal rígido.

- Se establece un marco penal rígido para los delitos de usurpación, es decir, el juez solo puede imponer la pena del grado señalado en la ley, sin posibilidad de rebaja por circunstancias atenuantes según las reglas generales.
- El artículo es inconstitucional, pues infringe el principio de proporcionalidad de la pena: prohíbe al juez bajar la pena para este delito, de menor gravedad (especialmente la usurpación no violenta), mientras que para otros de mayor gravedad como el secuestro o el homicidio se siguen aplicando las reglas generales.

Además de los artículos ya señalados, sería conveniente el rechazo de los siguientes:



- Los artículos que establecen una pena cuando los delitos de usurpación se cometieren por una organización delictiva y que autorizan la aplicación de técnicas especiales de investigación. Tanto la sanción de la organización delictiva como las técnicas de investigación para esos casos están especialmente regulados en la Ley de crimen organizado despachada recientemente por el Congreso, por lo que podrían generarse problemas interpretativos.
- Tanto el nuevo artículo 157 bis como 189 del Código Procesal Penal regulan la restitución anticipada del inmueble usurpado en sede penal. Se sugiere preferir el primero, que impone a la víctima del delito ciertas garantías de que demandará civilmente para obtener la restitución definitiva. Así se evita que la herramienta se use de forma abusiva, por ejemplo, por un arrendador que pretenda la salida inmediata de un arrendatario, o por un comunero que busque la salida rápida de otros comuneros.

**4. PROPUESTA DE PALABRAS PARA EL H. SENADOR ESPINOZA, DISCUSIÓN PARTICULAR EN SALA, proyecto de ley que establece en favor del Estado una compensación, denominada royalty minero, por la explotación de la minería del cobre y del litio.**

Señor presidente:

Luego de 5 años de tramitación, inaceptables presiones de grupos de poder y tras rebajar 3 veces la tasa máxima tributaria que finalmente pagara la minería al Estado chileno, concurrimos esta tarde a aprobar un royalty minero, de tan solo un 46.5 por ciento.

Además, se ha cedido a admitir un serie de descuentos en la base imponible para determinar la cifra anteriormente mencionada lo que, en términos reales, implican que los fondos que por esta actividad lleguen a las arcas fiscales, disten mucho de aquel en su momento aprobado por la Cámara y del consenso internacional para regular estas materias.

La historia de la tramitación de esta ley, señor presidente, constituirá un caso de estudio acerca de cómo un Estado y sus representantes, resultan incapaces frente a los intereses de multinacionales globalizadas y sus mandatarios locales, para luego renunciar a la pretensión mínima de que quienes exploten recursos naturales de una Nación toda, deban concurrir con impuestos y compensaciones tales, que el

país pueda captar, al menos, la mitad de la renta minera que, en su nombre, explotan inversionistas extranjeras.

Dicho lo anterior y puestos ante la realidad descrita, quiero anunciar mi voto favorable a esta iniciativa, por nuestro compromiso de apoyo y lealtad al Gobierno del presidente Boric y, esencialmente, porque estimo que el mecanismo de compensaciones establecido para los impactos sociales y ambientales que esta actividad produce en los territorios en que se emplaza, así como, su distribución mediante aportes directos a nivel regional y local, constituye un avance significativo en justicia redistributiva.

Similares situaciones ocurren en la Región que represento ante este hemicycle, donde la actividad acuícola y forestal, si bien constituyen polos fundamentales de crecimiento económico para Los Lagos, se encuentran largamente al debe respecto a las cargas ambientales y sociales que generan.

Por ello, y considerando el precedente que esta norma generará una vez que resulte aprobada, quiero emplazar al ministro de Hacienda aquí presente, para que constituya una mesa de trabajo, con todas y todos los actores involucrados e interesados, para consensuar e ingresar un mensaje presidencial que de inicio al debate de una compensación ambiental y social, para la industria salmonera y la de monocultivos.

Pongo desde ya a su disposición el trabajo avanzado por mis asesores y asesoras, respecto a una iniciativa como la que propongo, labor que, consultando las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), así como la tradición jurídica en la materia, nos ha permitido concluir que no existe limitante constitucional o legal alguno para establecer este tipo de contribuciones para dichas industrias, resultando, por el contrario, obligado el Estado a implementar políticas públicas al respecto.

Estas, señor presidente, deben establecer un componente ad valorem -que propongo en 1 por ciento de las ventas totales- pues, si bien se podría argumentar de que no se trata de recursos naturales no renovables, los efectos del cambio climático, así como el tipo y volumen que estas actividades presentan, provoca la pérdida y deterioro de los ecosistemas en que se emplaza, altera o destruye los servicios ambientales que estos prestan al Medio y las personas y, tal vez lo más lamentable, amenazan con la extinción de la biodiversidad.

Por otra parte, señor presidente se trata de actividades que, en términos prácticos, escapan a una Evaluación Ambiental formal a través de Estudios de Impacto, acumulan causas por daño ambiental en los Tribunales especializados, así como múltiples denuncias ante la Superintendencia del Medio Ambiente.

Finalmente, se mantiene un gran manto de duda sobre el cumplimiento de la normativa de seguridad y laboral en ambas industrias, el que se ha explicitado en la tragedia de los buzos de mi Región o en los mega incendios forestales que aumentan verano con verano, todos ellos fruto de un regulación inexistente o laxa en exceso.

En consecuencia, estando acreditado la existencia de estos pasivos sociales y ambientales, fluye clara y evidente la necesidad y legitimidad de avanzar en la constitución de fondos de destino local para atacar estos males, los cuales se nutrirán de un porcentaje de los mayores valores que alcancen las utilidades de estas empresas, fruto de aumentos de precio y/o producción.

He dicho señor presidente.

#### **5. Reporte Proceso Constituyente para H. Senador Espinoza (23 DE MAYO).**

Subcomisiones despachan al Pleno de la Comisión Experta sus informes finales (se adjuntan) configurando un texto que, se someterá al proceso de Pleno que se verificará esta semana, una vez vencido esta jornada el plazo para renovar indicaciones y/o pedir votación separada para las mismas.

A partir del martes 23 de mayo se realizarán los debates y votaciones por parte del Pleno de la instancia para generar el texto definitivo que, tras su sanción definitiva, deberá ser refrendado por los electos consejeros constitucionales, a partir del 6 de Junio.

En cuanto al contenido de la propuesta constitucional, en materia de derecho constitucional ambiental, se amplía su adjetivación, incorporando su sanidad y sostenibilidad.

También, se incorporaron criterios y deberes de conservación, preservación, equidad, desarrollo sostenible, cambio climático, cargas ambientales y de reparación.

Por último, en cuanto a los instrumentos de gestión ambiental, se establece que las instituciones administrativas y jurisdiccionales en materia ambiental, serán de carácter técnico y, respecto a los procedimientos de evaluación ambiental, estos

serán de carácter técnico y participativo, asegurando una decisión razonable y oportuna.

**6. Reporte Proceso Constituyente para H. Senador Espinoza (29 DE MAYO).**

Pleno de la Comisión Experta aprobó las enmiendas correspondientes a los seis primeros capítulos del borrador de texto, visado previamente en general.

Las disposiciones despachadas por la instancia describen un texto marcadamente presidencialista, con un énfasis notorio en la promoción de partidos políticos fuertes y bajo la concepción de un Estado “Social y Democrático de Derecho”, que no obsta la iniciativa privada, sustentado en el equilibrio de los tres poderes ya consagrados en la Constitución vigente.

Sin innovar de manera significativa en sus principios e incorporando un acotado listado de derechos sociales, la materialización de las normas se basó en lo que los Comisionados denominaron textos de “unidad de propósito”, redactados sobre la base de entendimientos suficientes entre todos los sectores que integran el órgano y que hicieron posible que prácticamente todos los artículos fueran despachados de manera unánime.

En lo que sigue, la plenaria deberá aprobar las disposiciones que integran los restantes seis capítulos durante la semana que inicia, habida cuenta que la propuesta constitucional resultante debe ser entregada a la consideración del electo Consejo Constitucional, a más tardar el próximo 6 de junio.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Zaido Lora' with a stylized flourish at the end.

**Firma asesora.**